

## **Estado y sociedad, ¿modernos?**

**José Luis Piñeyro**

**31 de marzo de 2007**

La participación de una escolta del Ejército mexicano en los honores a la bandera durante la inauguración del Congreso Internacional Provida y la foto de promoción con militares y jugadores del club de fútbol privado Chivas del Guadalajara son actos que resultan inéditos aun para el larguísimo periodo cuando el PRI fue partido de gobierno y de Estado, a lo mejor porque el presidencialismo autoritario respetaba las formas de un Estado laico.

El primero fue un acto social privado sobre un tema de aguda controversia actual, el aborto legal; el segundo, aunque hubiera sido la selección nacional de soccer, no justificaba el recurso a una institución del Estado que se dice debe estar alejada de la política o de los reflectores.

A lo mejor, como se dice o sospecha, Calderón pretende por un lado enviar un claro mensaje de apoyo al protagonismo clerical y panista antiaborto, lo que nos recuerda los tiempos de la Colonia española cuando la evangelización y dominación de los indígenas se daba por medio de la espada o la cruz, y por otro, busca aumentar su escasa legitimidad recurriendo al estimulado fanatismo futbolero que se preocupa más por los goles anotados que por los cientos de migrantes mexicanos muertos en la frontera o las mujeres asesinadas en Juárez y otras ciudades.

La reciente respuesta de la Defensa Nacional sobre la presencia militar en el acto de Provida, y en cualquier otro acto cívico u obra social, argumenta que se rige "Bajo un carácter totalmente institucional, sin interés político o a favor de postura o tema de debate nacional", pero no convence a nadie, a menos de que cuando haya un congreso internacional proaborto o proislámico también se mande sin mayor trámite una escolta, por aquello de la laicidad del Estado y de la equidad social de acceso a los servicios de las instituciones.

Desde otro ángulo complementario, cabe destacar que el protagonismo clerical antiaborto encabezado por el cardenal mexicano Norberto Rivera y el cardenal colombiano enviado por el Estado del Vaticano, Alfonso López Trujillo, ha pasado inadvertido para Florencio Salazar, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, quien sí exhortó a los legisladores capitalinos al "diálogo" sobre la propuesta de ley respecto del aborto, pero olvidó aplicar la ley a ambos sacerdotes o criticar la mínima discusión de los senadores del PRIAN al aprobar la ley botín del ISSSTE.

Ahora bien, cabe subrayar que los antiabortistas han simplificado mañosamente el debate sobre la despenalización del aborto. No es este una obligación el practicarlo, sino un derecho que la mujer puede ejercer o no según sus razonamientos laicos o religiosos y sus condiciones socioeconómicas de vida actual o futura. También cuando se dice que tal derecho responde a un problema de salud pública se alude a los más de 20 mil abortos clandestinos practicados en la ciudad capital (100 mil a nivel nacional) en condiciones insalubres con resultados de muertes y padecimientos posteriores. Igualmente, cuando se señala que ese derecho implica una cuestión de justicia social, se alude a la enorme desigualdad económica imperante, donde sólo un muy reducido grupo de mujeres pueden pagar un aborto seguro en instalaciones higiénicas en el país o en Estados Unidos.

A propósito de justicia social y jurídica, ¿por qué monseñor Rivera no se preocupa por el castigo a delincuentes religiosos pederastas, a los responsables de la muerte de los mineros en Pasta de Conchos, a la violación a los derechos de los trabajadores, como plantea la organización Católicas por el Derecho a Decidir?

En resumen, si desde las instituciones del Estado se fomenta una cultura intolerante frente a la diversidad política (indígenas, gays, lesbianas, abortistas, altermundistas, etcétera) y se apoya y promueve un modelo económico excluyente en lo social que privatiza los beneficios y socializa las pérdidas privadas como lo ejemplifican los rescates carretero, bancario, azucarero, entonces, no se puede más que llegar a la siguiente conclusión: la modernidad salvaje del capitalismo mexicano no tiene nada que ver con los viejos ideales de libertad, igualdad y fraternidad que enarboló la revolución burguesa en Francia hace más de dos siglos.

A principios del siglo XXI, queda por hacer efectivos estos ideales desde una perspectiva democrática que otorgue nuevo contenido a las funciones del Estado y a las relaciones entre las clases de la nación mexicana.

jlpineyro@aol.com

Profesor investigador de la UAM-A